



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

EL TSJA Y LA ENSEÑANZA CONCERTADA: LOS CASOS ÁNFORA Y SANSUEÑA- MONTEARAGÓN

José Mateo Moraz

Dirigido por

Dr. Javier Ferrer Ortiz

Facultad de Derecho
2020

ÍNDICE

ABREVIATURAS	3
I. INTRODUCCIÓN	4
II. CASO ÁNFORA	7
1. Antecedentes	7
2. Objeto de la STSJA 168/2019	10
3. Denegación de apertura y funcionamiento del centro	13
4. Acceso al régimen de concierto educativo	14
III. CASO SANSUEÑA-MONTEARAGÓN	16
1. Antecedentes	16
2. Objeto de las SSTSJA 374/2017, 145/2015 y 698/2019	18
3. Motivación de la denegación del concierto	20
4. Sistema educativo dual	21
5. Necesidad de escolarización	23
IV. CONCLUSIONES	26
V. FUENTES CONSULTADAS	29

ABREVIATURAS

BOA	Boletín Oficial de Aragón
CE	Constitución Española
CECE	Confederación Española de Centros de Enseñanza
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
DGA	Diputación General de Aragón
DUDH	Declaración Universal de Derechos Humanos
LRJPAC	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
LODE	Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación
LOE	Orgánica de Educación
LOMCE	Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Enseñanza
LJCA	Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
RD	Real Decreto
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
S(S)TSJA	Sentencia(s) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo
TSJA	Tribunal Superior de Justicia de Aragón
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

I. INTRODUCCIÓN

La educación es un factor fundamental del desarrollo integral de la persona, clave para el cultivo de sus facultades intelectuales, morales y sociales. Constituye un elemento determinante de desarrollo económico, adaptación y movilidad social. Un elemento tan importante para el crecimiento del individuo nunca puede verse dissociado del ejercicio de la libertad. La defensa del derecho de los padres a la educación de sus hijos dentro del marco escolar es lo que denominamos libertad de enseñanza. Al igual que la educación, la libertad de enseñanza es el derecho humano que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos.

Este derecho consagra la libertad de los padres de elegir principalmente la educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con las convicciones sostenidas por la propia familia, incluyendo, por ejemplo, la fe en la que creen o practican.

También tienen el derecho de educar a sus hijos según sus preferencias en todos los aspectos; tales como, la elección de los idiomas que aprenden, las disciplinas deportivas o artísticas que practican; o bien, las metodologías sobre las que se basa la impartición de la educación.

El Estado tiene un papel primordial a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, desarrollando una estructura normativa que organice y asegure el acceso y la calidad de esta. Este poder debe ejercerlo desde el respeto a la libertad de los propios escolares y sus familias. Para ello es necesario que estas funciones de promoción y control se enmarquen en una igualdad de oportunidades entre la iniciativa pública y privada, debido a que no es lo mismo vigilar que obstaculizar o impedir la libertad.

Fruto de esta concurrencia en los derechos humanos a la educación y a la libertad surge el modelo de enseñanza concertada, mediante la cual el Estado garantiza la opción de recibir la prestación educativa en un centro de titularidad privada sostenido por fondos públicos. De esta manera se logra que, dentro de unos márgenes, todos los padres tengan la libertad de poder matricular a sus hijos en un centro que cuente con un ideario propio que les parezca apropiado, independientemente de la neutralidad sobre la que se asienta la educación impartida en los centros públicos.

En España este principio de libertad de elección de la enseñanza, al igual que en la mayor parte de países de nuestro entorno, ha sido tradicionalmente respetado desde que en 1985 se implantó la enseñanza concertada. Sin embargo, este modelo de libertad educativa es objeto de polémica en nuestro país, siendo el centro de algunas discusiones políticas.

La existencia y financiación de los centros concertados han sido el origen de diferentes disputas políticas en las últimas dos décadas. Diferentes administraciones autonómicas han tratado de cercar la enseñanza concertada por medio de la denegación o la no renovación de conciertos educativos.

Fruto de estas actuaciones han surgido diferentes disputas con padres que quieren ejercer su derecho a la libertad de educación. La mayoría de ellas se han trasladado al ámbito judicial, donde se han sucedido numerosos litigios que han dado lugar a una extensa jurisprudencia sobre el tema.

En nuestra comunidad autónoma, varios han sido los ejemplos de estas controversias, entre las cuales destacan los enfrentamientos con el gobierno aragonés de los padres de los Colegios Ánfora y Sansueña-Montearagón.

El objeto del presente trabajo es analizar la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre estos casos, la cual tiene como denominador común la defensa del derecho a la libertad de enseñanza de los padres ante el intento de limitarlo por parte de la Diputación General de Aragón.

Para ello, la estructura de este trabajo sigue un desarrollo inductivo. Comienza con una exposición de los hechos que dieron lugar al litigio. Continúa con el análisis de los fundamentos jurídicos de las cuatro sentencias que resuelven sobre las órdenes de denegación de los conciertos educativos impugnadas por los padres. Finalizando con las principales conclusiones que a mi modo de entender cabe extraer del asunto.

Con tal intención he examinado, tal como hace el propio TSJA, el conjunto de textos internacionales y nacionales que configuran y concretan el derecho a la libertad de educación, mostrando especial atención a la normativa, tanto nacional como

autonómica, que rige la concesión de conciertos educativos y a la distinta jurisprudencia que inspira el fallo del tribunal.

Desde que empecé mi etapa escolar hasta que llegué a la Universidad de Zaragoza, he sido alumno de un centro concertado. El fundador de la orden propietaria de mi colegio, el aragonés San José de Calasanz, fue un precursor en cuanto se refiere a la reivindicación de una escuela gratuita y en libertad. Buen conocedor como era del potencial de la educación para transformar la vida de un niño acuñó el lema “Piedad y Letras”. Este carisma fue determinante para que mis padres, ejerciendo su libertad y pretendiendo lo mejor para mí, decidieran matricularme en un colegio escolapio, cuyo ideario se basa principalmente en algo tan importante para mi familia como es defender la dignidad de la persona.

Con esta experiencia trato de explicar antes de abordar el trabajo cómo, desde mi punto de vista, la educación concertada no debe entenderse como una opción caprichosa, sino como un derecho personal y trascendental de los padres para con el desarrollo de sus hijos.

Estas concepciones sobre la educación y la libertad; así como, mi convicción sobre el deber que tienen el Derecho y el Estado, por su propia naturaleza, de velar por su protección, fueron las que me guiaron para elegir este tema para la elaboración de mi Trabajo Fin de Grado.

II. CASO ÁNFORA

El Colegio Internacional Ánfora es un centro docente que fue creado en el año 2015 para satisfacer la carencia de centros de enseñanza ante el enorme crecimiento de la población infantil en la población de Cuarte de Huerva (Zaragoza).

Jurídicamente, el centro, como cooperativa de trabajo asociado, se corresponde con la figura de Sociedad Cooperativa¹.

Con el paso del tiempo, ha ido extendiendo su ámbito de actuación a la enseñanza de diferentes ciclos educativos como Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; además de prestar otra serie de servicios relacionados con la actividad del centro.

1. Antecedentes

En un origen, el Gobierno de Aragón otorgó la autorización para la construcción del centro, mediante una resolución del Director General de Ordenación Académica de 24 de febrero de 2015, la cual también acordaba, la adecuación de las instalaciones a los requisitos legales requeridos. En base a esta resolución, comenzaron las obras con el objetivo de poder iniciar la actividad del centro en septiembre de 2015, coincidiendo con la apertura del curso académico 2015/2016.

También de cara a este curso, el Colegio Ánfora solicitó su acceso al régimen de conciertos educativos, el cual fue resuelto positivamente por parte de la Administración educativa, siendo modificado en varias ocasiones el número de unidades escolares beneficiadas por dicho régimen.

El 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones a las Cortes de Aragón, cuyo resultado conllevó un cambio de color político en el gobierno autonómico, pasando de estar la Consejería de Educación en manos de María Dolores Serrat Moré, del Partido Popular, a María Teresa Pérez Esteban Pérez, del Partido Socialista Obrero Español.

¹ De acuerdo con la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Posteriormente, el Colegio Ánfora procedió a solicitar la autorización de apertura y funcionamiento del centro, la cual, ya bajo la actuación del nuevo ejecutivo, fue denegada el 20 de agosto de 2015, por medio de una resolución del Director General de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón².

Esta denegación estuvo motivada por la existencia de una serie de deficiencias observadas por técnicos de la Administración durante una inspección que, según la Resolución las hacían incompatibles con la autorización de apertura y funcionamiento del centro.

Sin embargo, al no compartir la decisión de la DGA, el centro decidió interponer el recurso de Derechos Fundamentales³ contra esta resolución de 20 de agosto de 2015, solicitando tanto la suspensión de esta como la concesión provisional de apertura y funcionamiento del centro.

El TSJA, órgano competente para conocer este recurso, mediante auto del 3 de septiembre de 2015 decidió por motivos de urgencia, ante la proximidad del comienzo del curso escolar, acceder a la medida cautelar solicitada por el centro y autorizar provisionalmente la apertura y funcionamiento de este. A diferencia de la Administración entendió que las deficiencias a las que aludía el informe técnico que motivó la denegación, o bien habían sido subsanadas, o bien no producían inseguridad alguna.

A consecuencia de denegar la autorización de apertura y funcionamiento del centro, la DGA, en la Orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de 31 de agosto de 2015, procede parcialmente a la suspensión de la Orden que había acordado el anterior ejecutivo, en el sentido en que deniega el expediente de acceso al concierto educativo del Colegio Internacional Ánfora para el curso 2015-2016.

Ante la estimación del recurso 174/2015, que comportaba la concesión provisional de apertura y funcionamiento, el centro solicitó al TSJA la ampliación del

² Publicada en el BOA de 1 de septiembre de 2015.

³ Recurso número 174/2015.

mismo, solicitando en esta ocasión la suspensión cautelar de la Orden de 31 de agosto de 2015.

El TSJA en base al auto de 3 de septiembre de 2015 acuerda acceder a la medida cautelar solicitada por el centro y, por tanto, que la apertura y funcionamiento del Colegio Internacional Ánfora se lleve a cabo como centro concertado, mediante otro auto, el 9 de septiembre de 2015.

Por su parte el Departamento de Educación inició un expediente de revisión de oficio de la Orden de 12 de junio, propuesta que fue informada con carácter desfavorable por el Consejo Consultivo de Aragón⁴ en noviembre del mismo año.

Con el transcurso del curso escolar, la Administración educativa se percató, mediante una inspección, de que en el Colegio Ánfora el número de alumnos no se correspondía con el que número para el cual el centro solicitó su acceso al régimen de conciertos, encontrándose vacías aulas que habían sido incluidas en el concierto.

De esta manera se incumpliría la obligación que tiene un centro concertado, de acuerdo con la normativa que rige la regulación de los conciertos educativos, de tener en funcionamiento el número de aulas que le son concertadas y hacerlo respetando la ratio alumnos/profesor que determina la Administración.

La inspección dio lugar a la emisión de un informe el 13 de octubre del 2015, concretando la relación de aulas vacías y el número de estudiantes del centro. Informe que tomó como base la DGA para dictar una resolución el 17 de noviembre de 2015⁵, con la cual justifica la reducción de aulas del centro, con el objeto de ajustar el número de unidades escolares y el régimen del concierto a los datos reales de escolarización,

En tal sentido, vuelve a modificar el régimen del concierto educativo del Colegio Internacional Ánfora aplicando los efectos restrictivos de la mencionada resolución con carácter retroactivo a 1 de septiembre de 2015.

Una vez más, el Centro disconforme con el contenido de tal Resolución, decide interponer recurso contra esta, ampliando el interpuesto anteriormente.

⁴ Dictamen número 291/2015, de 24 de noviembre de 2015.

⁵ Publicada en el BOA de 30 de diciembre de 2015.

La situación del Colegio permanece así hasta el 2 de abril de 2019, día en el que el TSJA resuelve mediante la Sentencia 168/2019 el litigio planteado entre este y la DGA

2. Objeto de la STSJA 168/2019

La STSJA 168/2019 fue dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, presidida por D. Juan Carlos Zapata Híjar y compuesta por otros dos magistrados D. Jesús-María Arias Juana y por D^a Isabel Zarzuela Ballester, el día 2 de abril de 2019.

La sentencia resuelve sobre el recurso 174/2015 interpuesto por 59 padres del centro educativo contra la DGA, relativo a la impugnación de:

- (1) La Resolución de 20 de agosto de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la cual se deniega la autorización de apertura y funcionamiento del Centro.
- (2) La Orden de 31 de agosto de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la cual se acuerda la suspensión parcial de la Orden de 12 de junio de 2015 del mismo órgano, por la que se resuelven los expedientes de acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso 2015-2016, en lo referente a la aprobación del expediente de acceso del Centro.
- (3) La Resolución de 17 de noviembre de 2015 del Director General de Planificación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se modifica el concierto educativo del centro "Internacional Ánfora", de Cuarte de Huerva.

El recurso solicita que el TSJA determine si la actuación de la DGA con relación al Colegio Internacional Ánfora, concretada en las Órdenes mencionadas, vulneró el derecho a la educación de los padres a la educación de sus hijos.

Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza están configurados como derechos fundamentales, objetos de reconocimiento y protección por diferentes textos normativos, tanto de rango internacional como nacional.

En el ámbito internacional, la DUDH⁶, contempla como tal el derecho a la educación en su artículo 26, concretado en su apartado número 3 que: *“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”*.

Así mismo, esta libertad de elección por parte de los padres a la educación que desean que sus hijos reciban, está recogida en el artículo 18.4. del PIDCP⁷, de 19 de noviembre de 1966 y, en el artículo 13.3. del PIDESC⁸, de misma fecha; los cuales establecen respectivamente:

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

En el marco europeo, el artículo 2 del Protocolo Adicional 1º al CEDH⁹ indica que: *“El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”*.

⁶ Proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III).

⁷ Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

⁸ *Ibidem*.

⁹ París, 20 de marzo de 1952.

En el plano nacional, tanto la DUDH como los otros textos internacionales anteriormente mencionados, forman parte de nuestro ordenamiento interno en virtud del artículo 10.2. CE, en virtud del cual los derechos fundamentales y las libertades reconocidas por nuestra Carta Magna han de ser interpretados de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En concreto, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza están consagradas en nuestro ordenamiento por el artículo 27 CE, configurados como derechos fundamentales, como el resto de los derechos y libertades públicas que se encuentran catalogadas en el Título I, Capítulo segundo, Sección 1.^a del texto constitucional. Este derecho se materializa entre otros aspectos, como, por ejemplo, en la libre elección de centro por parte de los padres sostenido con fondos públicos.

Con relación a la STSJA 168/2019, el artículo 27 CE especifica el contenido de la libertad de enseñanza en sus apartados 3, 6 y 9.

De tal manera, desde una óptica constitucional la libertad de enseñanza abarca además de la garantía por parte de los poderes públicos del derecho de libre elección por parte de los padres al tipo de educación que quieren recibir para sus hijos, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales y la posibilidad de que el estado ayude económicamente a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

Este derecho también ha sido desarrollado y concretado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia del TC, destacando la STC 5/1981 y la STC 77/1985.

Debido a esta especial condición del bien jurídico del cual se solicita protección, el derecho a la educación, la tramitación del recurso se hizo en base a los artículos 114 a 122 de la LRJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio), el cual desarrolla el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Este es un procedimiento especial de carácter preferente y urgente frente a la lesión de los derechos susceptibles de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuación administrativa con el ordenamiento jurídico¹⁰.

¹⁰ Exposición de Motivos, apartado VI, párrafo segundo.

3. Apertura y funcionamiento del centro

En cuanto a la primera resolución de las descritas, la Sala se reafirma en la decisión que tomó en el Auto de 3 de septiembre de 2015, concediendo provisionalmente la autorización de apertura y funcionamiento del Centro.

De esta manera argumenta que no eran suficientes para denegar la autorización los motivos aducidos por la Administración, basados en una inspección realizada entre otros el Arquitecto Técnico de la Unidad Técnica de Construcción del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, concretados en un informe desfavorable emitido el 19 de agosto de 2019; es decir, un día antes que la Resolución impugnada.

Con relación a este Informe, el Tribunal se centra en analizar, de una parte, los defectos apreciados por los técnicos y, de otra, la forma en la que se realizó la Inspección por parte de la Administración.

En primer lugar, justifica la autorización de apertura y funcionamiento del centro en el hecho de que el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, el 26 de agosto de 2015, tras previos informes técnicos, concedió a la obra la licencia de primera ocupación. Para motivar la concesión de esta licencia, se comprobó la subsanación de los defectos descritos por la Administración autonómica, corroborando la reparación de los mismos a falta de un par de ellos, los cuales además de ser subsanables se consideran compatibles con la apertura del centro y ejercer la actividad en su interior de manera segura.

Así mismo, se fija atentamente en la forma de actuación de la Administración, la cual la propia sentencia tilda de injustificada. Para llegar a esta conclusión, la Sala, parte *ab initio* de que se procedió a una sorpresiva y anómala actuación. Destaca que, en un corto plazo de tiempo se produjo la inspección que dio lugar al informe que motivó la denegación de la autorización de apertura; sin tener en cuenta la facilidad para subsanar las deficiencias percibidas ni dar un margen suficiente para proceder a su adecuación.

Debido a la forma en la que la sentencia describe como tuvo lugar este procedimiento podemos deducir una arbitraria actuación por parte de la Administración, fruto de la cual el centro quedó en una delicada situación, según la cual no podía abrir sus puertas al inicio del curso escolar.

Esto; además de comportar la denegación del concierto educativo, posteriormente concedido de manera provisional junto a la autorización de apertura y funcionamiento tuvo, una importancia incidencia en el número de solicitudes de matriculación en el centro.

4. Acceso al régimen de concierto educativo

El concierto educativo es la herramienta jurídica por la cual se financia con fondos públicos a aquellos centros de carácter privado que cumplen con una serie de requisitos, mediante la cual se estructura nuestro modelo educativo, con el objeto de posibilitar el derecho a percibir la educación obligatoria de manera gratuita en un centro diferente a los de propiedad pública. Esto explica la conexión entre la denegación de un concierto educativo y la posible vulneración del derecho fundamental a la educación, ya que la figura del concierto constituye una garantía de este.

En un primer lugar, la modificación del acceso al concierto educativo vino determinada, tal como argumenta la Consejería de Educación, por la Resolución de 20 de agosto de 2015. Esto se debe a que la autorización de apertura y funcionamiento del centro es un requisito indispensable para acceder al régimen de conciertos educativos, tal como establece el artículo 5 del RD 2377/1985.

Sin embargo, la sentencia, confirma la concesión provisional del concierto educativo, acordada por el Auto de este mismo tribunal el 9 de septiembre de 2015, debido a que la autorización de apertura y funcionamiento del centro se concedió, también de manera provisional, por el TSJA.

En relación con la disminución del número de alumnos que acabaron matriculados en el curso 2015/2016, que da lugar a la Orden del Departamento de Educación de modificar el concierto educativo de Ánfora, el tribunal achaca tal

circunstancia a la situación de inseguridad transmitida a los padres sobre la continuidad del centro.

Procede a abordar el debate sobre si el hecho de conceder o denegar un concierto educativo puede, tal como afirman los demandantes, vulnerar el derecho fundamental a la libertad de enseñanza.

Para ello deriva en la doctrina del TS, según la cual, en base a la exigencia que establece el artículo 27.4. CE sobre la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, se aprecia, con objeto de garantizar dicha gratuidad en los centros privados que reúnan los requisitos establecidos por medio de la figura del concierto, la existencia de “una íntima relación con la libertad de creación de centros docentes”.

Por tanto, tras estudiar y valorar las cuestiones de legalidad ordinaria, apreciando que la suspensión y posterior modificación del concierto educativo al centro Ánfora son consecuencia directa de la denegación discrecional por parte de la Administración de la autorización de apertura y funcionamiento del centro, determina que la DGA efectivamente infringió el derecho de los padres a la elegir el centro educativo de sus hijos. De esta manera, procede a anular las órdenes impugnadas por vulneración del derecho fundamental a la educación.

III. CASO SANSUEÑA-MONTEARAGÓN

Fomento de Centros de Enseñanza es una institución educativa de carácter privado presente en nuestra comunidad autónoma, en la ciudad de Zaragoza, mediante los Colegios Sansueña y Montearagón, los cuales son centros con carácter propio, conocidos sobre todo por apostar por la educación diferenciada como modelo pedagógico.

Entre otros motivos, tras percibir en sus centros que había padres que no matriculaban a sus hijos debido a una cuestión económica, ambos colegios solicitaron su acceso al régimen de conciertos educativos. Dichas solicitudes fueron denegadas en tres ocasiones, tanto por Gobiernos liderados por el Partido Popular como por el Partido Socialista Obrero Español, por lo que emprendieron una larga confrontación judicial contra la DGA, fruto de la cual, el TSJA dictó otras tantas sentencias, que como se expondrá posteriormente reconocieron el derecho al concierto educativo solicitado por los Colegios Montearagón y Sansueña.

1. Antecedentes

En primer lugar, de cara al curso 2014/2015, ambos centros solicitaron el concierto educativo para las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria en el caso del Colegio Sansueña; y para Primaria y Secundaria en el del Colegio Montearagón, ya que entendían que cumplían los requisitos establecidos tanto en el RD 2377/185 como en la Orden de 16 de diciembre de 2013¹¹ de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la cual se convocaba el procedimiento para acceder al régimen de los conciertos educativos para mencionado curso.

En un primer momento la Directora Provincial de la Consejería afirmó en una reunión de la Comisión Provincial de Conciertos educativos, celebrada el 3 de marzo de 2014, que ambos colegios; además de incumplir la ratio establecida por la Administración en su etapa de primaria, no satisfacían necesidades de escolarización. Esta opinión fue rebatida por un asistente, representante de CECE, el cual argumentaba que en ellos se escolarizaba a alumnos de zonas donde sí existían dichas necesidades.

¹¹ Publicada en el BOA de 30 de diciembre de 2013.

Esta denegación del acceso al régimen de conciertos se materializó en la Orden de 12 de septiembre de 2014 de la entonces Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se resuelven los expedientes de acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2014/2015¹². En ella se indica que la denegación se basó en el hecho de que los colegios incumplían algunos de los requisitos y/o criterios establecidos por la legislación en materia de conciertos educativos, así como en las bases recogidas por la orden de convocatoria. En concreto la orden aducía, entre otros, al incumplimiento de los artículos 109 y 116 de la LOMCE y del RD 2377/1985, o la base primera f) de la citada orden.

Al no estar de acuerdo, el 31 de octubre de 2014, los centros interpusieron un recurso contencioso-administrativo con la intención de anular la orden de 12 de septiembre de 2014 y lograr que se les declarase el derecho a la concertación educativa¹³.

A final de 2014, la Consejería de Educación convocó un nuevo procedimiento para el acceso y modificación de conciertos educativos para el curso académico 2015/2016, por medio de la Orden de 30 de diciembre de 2014¹⁴. A raíz de dicha convocatoria, los centros volvieron a solicitar el concierto, en esta ocasión para más unidades en el caso del Colegio Montearagón y para menos en el del Colegio Sansueña.

De nuevo, en una reunión de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos; en esta ocasión celebrada el 25 de febrero de 2015, la Administración volvió a insistir en que los centros no satisfacían necesidades de escolarización, argumento que fue nuevamente contradicho por el representante de CECE, quien en esta reunión incidió, además, en que la educación diferenciada era admitida por la normativa.

En efecto, la educación diferenciada, pese a las polémicas que suscita, constituye un modelo pedagógico respetado por nuestro ordenamiento. Como apunte conviene apuntar que la jurisprudencia, como por ejemplo la STS 5492/2012, ha negado taxativamente que la educación diferenciada sea discriminatoria, aparándose en los artículos 1 y 2 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza adoptada por la UNESCO, suscrita por España en 1969;

¹² Publicada en el BOA de 22 de septiembre de 2014.

¹³ Recurso número 200/2014.

¹⁴ Publicada en el BOA de 13 de enero de 2015.

confirmados por el Comentario General 13 sobre el Derecho a la Educación del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU en 1999.

También es preciso en relación con este asunto destacar que el TC en el fundamento jurídico nº4 de su sentencia 31/2018, recalando que este modelo se trata de un “sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico”, avala la constitucionalidad de la redacción que la LOMCE daba al artículo 84.3 LOE. Este precepto esclarece que los centros que sean de educación diferenciada tienen el mismo derecho a recibir financiación pública que el resto.

La denegación del acceso para estos centros al régimen de conciertos para el curso escolar siguiente se indicó en la Orden de 1 de junio de 2015 de la Consejera de Educación; la cual fue recurrida¹⁵ por los mismos motivos que la anterior; es decir, falta de motivación, carecer del informe del Servicio Provincial y considerar que los centros satisfacían necesidades de escolarización además de cumplir con el resto de los requisitos necesarios para la concesión del concierto.

El 22 de febrero de 2017 el TSJA dictó dos sentencias resolviendo los dos recursos interpuestos por parte de los colegios de Fomento. En ellas declaró que las ordenes por las que se les denegaba el concierto no eran conformes a derecho y reconoció a estos centros el derecho a los conciertos que habían solicitado.

Pese a esto, por medio de la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de 8 de agosto de 2017¹⁶, la Administración denegó el concierto educativo a los colegios Sansueña y Montearagón para el curso académico 2017/2018. Dicho acto fue de nuevo recurrido por los centros¹⁷.

2. Objeto de las SSTSJA 374/2017, 145/2015 y 698/2019

La impugnación de estas órdenes fue resuelta por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las sentencias 374/2017, 145/2015 y 698/2019; fechadas las dos primeras el 22 de febrero de 2017 y, posteriormente en relación con la tercera, el 27 de mayo de 2019.

¹⁵ Recurso número 180/2015.

¹⁶ Publicada el 17 de agosto de 2017.

¹⁷ Recurso número 270/2017

Dichas sentencias tuvieron por objeto determinar si las Órdenes de 12 de septiembre de 2014, de 1 de junio de 2015 y de 8 de agosto de 2017; por las que se denegó el acceso al concierto educativo a los colegios Sansueña y Montearagón, fueron conformes a Derecho.

En desacuerdo con la actuación de la DGA, Fomento de Centros de Enseñanza de Aragón, S.A. solicitó la anulación de dichas órdenes argumentando de una parte, que ambos colegios habían acreditado debidamente satisfacer necesidades de escolarización; y también, que las órdenes impugnadas carecían tanto de los necesarios informes del Servicio Provincial como de la pertinente motivación. Esta falta de motivación se desprende del hecho de que el Departamento de Educación no adjuntase datos o cifras que justificasen la ausencia de necesidades de escolarización, razón por la cual se entendió fundamentada la denegación del acceso al régimen de conciertos educativos, ya que no se alegó la falta de consignaciones presupuestarias.

Por su parte, la Administración defendía que la oferta educativa de la zona estaba ya cubierta por la existencia de diversos centros, tanto de carácter público como privado concertado, lo cual no permite sostener la necesidad de escolarización que sostenía la parte demandante. Con relación al hecho de que no existiese sobre el asunto un informe del Servicio Provincial, la DGA afirmaba que la competencia para elaborarlo correspondía a la Comisión Provincial de Conciertos Educativos, el cual sí lo emitió. Por último, acreditaba la existencia de una suficiente motivación en el hecho de que los centros conocieron los motivos por los cuales se les denegó el concierto, sin hacer mayor especificación.

Además, los centros solicitaron el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, consistente en la declaración del derecho de los Colegios Montearagón y Sansueña a la concertación educativa con la Administración aragonesa. Esta solicitud supone una pretensión accesorio a la anulación de los actos incurridos, que en caso de estimarse implica la adopción de las medidas adecuadas para el restablecimiento de esta situación, como, por ejemplo, la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda¹⁸.

¹⁸ De acuerdo con el artículo 31.2 LRJCA.

3. Motivación de la denegación al concierto

Para comenzar, el TSJA atiende a la falta de motivación de las denegaciones del concierto aducida por Fomento de Centros de Enseñanza de Aragón, S.A., señalando que el contenido una motivación en estos supuestos debe corresponderse con el desarrollado por la normativa y la jurisprudencia.

La necesidad de motivar un concierto educativo deriva del RD 2377/1985, el cual indica: “La aprobación o denegación de los conciertos se efectuará por los órganos a que se refiere el artículo tercero, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos previstos y de acuerdo con los correspondientes criterios de preferencia. Si la resolución fuera denegatoria, ésta deberá ser motivada”¹⁹.

En tal sentido, se refiere a las STS de 25 de septiembre de 2012 y a la STS de 19 de febrero de 2013, que resolviendo sobre cuestiones análogas señalaron que debe exigirse en la motivación de denegación o no renovación de un concierto educativo explicitar razonadamente y acreditar cuales son los criterios necesarios para la concesión. Estos requisitos son a grandes rasgos: la inexistencia de necesidades de escolarización o la insuficiencia de consignación presupuestaria.

Por tanto, establecen que es necesario profundizar cual de estos requisitos no concurre para justificar la denegación, no sirviendo emplear como motivación; tal como reproducen las sentencias, “fórmulas estereotipadas o juicios de valor carentes de todo sustento para denegar el concierto o no acceder a su renovación”.

Además, considerando que la denegación del concierto a un centro puede vulnerar un derecho fundamental como es el derecho a la educación, es necesario precisar tal como hacen las STS de 16 de diciembre y STS de 21 de diciembre, que el hecho de motivar un acto de tal naturaleza también es de obligatoria exigencia según lo dispuesto en la LRJPAC²⁰.

¹⁹ Artículo 24.1. RD 2377/1985.

²⁰ Artículos 54.1. a) y 54.2) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el caso de la actuación de la DGA con relación a los Colegios de Fomento, el tribunal señala que la motivación empleada para las sucesivas denegaciones no está justificada. Indica que la Administración debería haber justificado su apreciación de no existir necesidad de escolarización mediante algún informe o expediente técnico que contradijese las memorias presentadas por los centros, quienes sostenían lo contrario.

De acuerdo con lo anterior, considera que la utilización de la expresión “no existe necesidad de escolarización”, sin aportar justificación alguna al respecto, es razón precisa para estimar el recurso y entrar a resolver el fondo del recurso. Es curioso cómo afirma que, de acuerdo con las sentencias mencionadas anteriormente, la falta de motivación sería suficiente para determinar la nulidad de los actos recurridos.

Sin embargo, entiende necesario acreditar si concurrían los requisitos exigidos para la concesión del concierto, por lo cual continua su análisis en esclarecer el resto de los motivos expuestos en los recursos, con especial atención a la existencia o no de necesidades de escolarización en la zona.

4. Sistema educativo dual

La Consejería de Educación de la DGA se opuso a este recurso por entender que los centros no cumplían con los requisitos necesarios para acceder al régimen del concierto. La Administración argumentó la denegación en una particular interpretación del artículo 109 LOE que trata sobre la programación de la red de centros educativos para aplicar el artículo 116 LOE que concreta la figura del concierto.

En este sentido el artículo 109 LOE establece que la Administración en relación con la programación de la red de centros educativos debe armonizar a la hora de ofertar plazas la obligación de los poderes públicos de garantizar tanto el derecho a la educación, como los derechos individuales en este ámbito de alumnos, padres y tutores legales.

Por tanto, de este artículo se desprende que el Estado debe desarrollar una red de centros que garanticen la escolarización gratuita, obviamente mediante la existencia de centros de titularidad pública, pero también mediante el sostenimiento con fondos públicos de centros privados. Es decir, la existencia de centros privados concentrados

como garantía de las diversas manifestaciones del derecho a la libertad educativa que comprende el artículo 27.3. CE.

Esta armonización entre ambos tipos de centros es detallada también en dicho artículo de la LOE, reformado por el artículo 68 LOMCE, determinando la exigencia de garantizar la existencia de suficientes plazas gratuitas estableciendo como límite las consignaciones presupuestarias, a las cuales no aludió en ningún momento la DGA.

Dicho precepto fue interpretado por la Administración educativa de manera que solo hay que atender al concierto de un colegio privado en aquellas circunstancias en las que no existan plazas suficientes en los centros de carácter público. Tal como señala la sentencia, esta concepción de necesidad de escolarización está configurada desde el prisma del principio de subsidiariedad, lo cual considera erróneo.

En concreto, el TSJA rechaza la denegación del concierto en este sentido, afirmando que la DGA obvió que nuestro sistema educativo, de acuerdo con las normas anteriormente descritas, se basa en el principio de enseñanza dual, según el cual en nuestro modelo cohabitan centros públicos y concertados. Esta naturaleza dual determina que la interpretación de la Consejería debió hacerse conforme a la no exigencia del principio de subsidiariedad.

En esta misma línea se ha manifestado el TS, en cuyo criterio se inspira la Sala, por ejemplo, al desestimar el recurso 1548/2006²¹ basándose en que no es posible aplicar el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza concertada; o bien, cuando desestimó el recurso 163/2007²² también relativo a la denegación de un concierto educativo justificando con respecto a la interpretación de este principio que: “Es contraria a la letra y espíritu de la Constitución.”

El tribunal indica que la naturaleza dual del sistema educativo español ha sido desarrollado así mismo por las diferentes leyes rectoras promulgadas desde el año 1985. Así mismo, en la Exposición de motivos de la LRDE, de dicho año, se estableció por primera vez que la red educativa española estaría integrada por 2 tipos de centros: los públicos y los privados sostenidos con financiación pública; es decir, los concertados. A

²¹ STS de 6 de noviembre de 2008.

²² STS de 18 de enero de 2010.

ambos la ley les encomienda la provisión de la enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad, en el mismo sentido en el que se pronunció la STS de 25 de mayo de 2016.

Este modelo también se consagra en los fundamental en la LOE del año 2006, a la cual aludió la Administración para denegar el concierto. La ley, aunque realiza alguna distinción entre los centros públicos y privados concertados en función de su titularidad; establece que ambos convergen en la prestación del servicio de enseñanza obligatoria y gratuita, y en el sostenimiento de estos mediante fondos públicos.

De manera más representativa, la Sala señala como si aceptase la interpretación de los preceptos 108 y 109 de la LOE que realiza la Consejería bastaría con el hecho de que la propia Administración fuese incrementando el numero de plazas a ofrecer en centros de su titularidad para conseguir, bajo el criterio de la falta de necesidades de escolarización y mediante la reducción de unidades concertadas en centros privados concentrados, erradicar la enseñanza concertada.

Esto podría ser así independientemente de la demanda que hubiese para matricular en centros privados concertados y conllevaría la desaparición de la posibilidad de recibir la educación obligatoria de manera gratuita más allá de en centros de titularidad pública. Se vulneraría por tanto el derecho constitucional a la libertad de educación.

Todo esto descarta por completo la aplicación del principio de subsidiariedad en materia de conciertos educativos. Es entonces desde esta base, el respeto a la naturaleza dual al sistema educativo vigente, sobre la cual el TSJA procede a analizar la supuesta falta de necesidad de escolarización esgrimida por la DGA.

5. Necesidad de escolarización

El tribunal centra su atención en determinar si existían en o no necesidades de escolarización en la zona, ya que la ausencia de estas fue la única causa en la que fundamentó la DGA las diferentes órdenes que denegaron el concierto a los Colegios Sansueña y Montearagón.

Con este objetivo y tras aclarar que de acuerdo con nuestro sistema de educación dual el hecho de que hubiese plazas vacantes en diferentes centros públicos del entorno e incidir en que tal existencia de plazas no ha sido acreditada, la sentencia refleja que los criterios sobre los cuales se debe fundamentar la necesidad de escolarización son aquellos que se recogían en la convocatoria de los mismos criterios.

De tal manera, de acuerdo con la órdenes impugnadas, comienza remitiéndose a lo dispuesto en el artículo 21 del RD 2377/1985, según del cual se desprende la obligación del centro de adjuntar conjuntamente a la solicitud del concierto educativo una memoria en la cual se exponga cómo su función satisface las necesidades de escolarización que existan en la zona donde se sitúa, atiende a escolares con condiciones socioeconómicas desfavorables; o bien; las características de interés pedagógico que realiza para el sistema educativo.

Pese a acreditar los centros estas circunstancias, la sentencia solo centra su valoración en la primera de las descritas, debido a que la propia Administración así lo hizo para fundamentar sus denegaciones del concierto.

Así mismo, para analizar dicha memoria presentada por el centro, el tribunal atiende a las ordenes de convocatoria de los conciertos denegados, en cuyas bases se establece que además de cumplir con lo establecido por el RD 2377/1985 los centros deben garantizar la impartición completa de enseñanzas en todos los cursos de cada una de las etapas beneficiadas por el concierto; así como, la continuidad de estos niveles en régimen de concierto educativo. Todo ello respetando las ratios de alumnos por unidad escolar, que son determinadas por la propia dirección General de Ordenación Académica del ejecutivo aragonés.

Por tanto, para corroborar la existencia o ausencia de necesidad de escolarización, así como el respeto al resto de requisitos establecidos por la normativa para acceder al régimen de conciertos educativos, es necesario atender a las propias memorias presentadas por los centros y por los datos que acreditan a la Sala, ya que estos nunca fueron desautorizados por la Administración mediante la presentación de informes o expedientes contradictorios a lo largo de los diferentes procedimientos.

En atención a los mismos, la sentencia desacredita la actuación de la DGA señalando que existe una clara necesidad de escolarización que justifica la concesión de los conciertos educativos a los Colegios Sansueña y Montearagón. Argumenta dicha circunstancia en el hecho de que la ubicación de dichos centros es notablemente próxima a una serie de zonas, el sur de la ciudad de Zaragoza²³ y el Corredor del Huerva²⁴, en las cuales dicha necesidad considera acreditada por un informe²⁵ encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la relación entre demanda y oferta de plazas escolares en el Distrito de Casablanca; y además, por las diferentes movilizaciones de padres reclamando la apertura de nuevos centros en la zona.

También tiene en cuenta a parte de la situación que se daba en el momento de solicitud del concierto, la cual continua patente actualmente, el hecho de que esta zona se encuentra en una situación de continuo crecimiento y cuenta con una importante parte de población en edad escolar²⁶, que previsiblemente garantiza el mantenimiento de esta necesidad de escolarización y el cumplimiento de la relación entre alumnos y profesores que exige el gobierno autonómico.

²³ Valdespartera, Arcosur, Montecanal y Rosales del Canal.

²⁴ Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva.

²⁵ Realizado por la empresa Scien Analytics, adjuntado en la demanda.

²⁶ De acuerdo a los datos del Observatorio Municipal de Estadística del Ayuntamiento de Zaragoza.

IV. CONCLUSIONES

- I. El derecho a la educación es un derecho fundamental que no puede ser configurado sin atender a la libertad de enseñanza.
- II. La libertad de enseñanza tiene diferentes garantías, entre las cuales destacan: el derecho a la creación de centros docentes con ideario propio, el derecho de las familias a elegir el centro para educar a sus hijos, y que esta capacidad de elección no sea económicamente condicionada.
- III. Todas estas dimensiones de la libertad de enseñanza han de ser garantizadas por la Administración, pese a que en ocasiones como en los casos descritos, no actúe en esta dirección.
- IV. Debido a estas diferentes manifestaciones, son varias las formas en las que la Administración, como autoridad competente en materia educativa, puede coartar el ejercicio de esta libertad, vulnerando así el derecho fundamental de la educación.
- V. Sin embargo, existe un gran desarrollo normativo y jurisprudencial que limita las facultades de la Administración a la hora de conceder las autorizaciones de creación, apertura y funcionamiento de un centro privado. Lo mismo sucede en materia de denegación o no renovación de conciertos educativos.
- VI. Los principios que han de guiar la actuación de las diferentes Administraciones, por encima de su concepción de la educación, son el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la atención a la naturaleza dual del sistema educativo español.
- VII. En el caso de las sentencias objeto de este trabajo, el TSJA atiende como objeto principal de los diferentes procesos a la defensa del derecho a la educación, manifestado en la libertad de enseñanza, demostrando claramente que este fue vulnerado por parte de la DGA a los padres de los colegios Ánfora, Sansueña y Montearagón.

- VIII. Estos fallos favorables a los intereses de los padres y sus centros educativos permiten identificar una línea jurisprudencial del TSJA propicia a la defensa del ejercicio de la libertad en el ámbito educativo.
- IX. Respecto al Colegio Ánfora esta vulneración de la libertad de enseñanza se materializó en diferentes aspectos. La DGA denegó la autorización de apertura y funcionamiento del centro, con la consecuente revocación del concierto educativo concedido con el anterior ejecutivo, pese a que existían datos técnicos acreditados que no justificaban dicha denegación. Una vez concedido provisionalmente por el TSJA tanto la autorización como el concierto, la DGA, aprovechándose de la situación de fragilidad en la que había sumido al centro y la inseguridad generada a los padres que deseaban matricular a sus hijos en el mismo, centró sus esfuerzos en reducir el número de unidades escolares concertadas, ignorando las patentes necesidades de escolarización de la zona donde se ubica el colegio.
- X. Con relación al caso Sansueña-Montearagón, y los procedimientos que denegaron los sucesivos conciertos solicitados por los centros, la DGA limitó la razón de su actuación a una apreciación tampoco acreditada de no existir tales necesidades de escolarización que permitiesen conceder los conciertos.
- XI. En ambos litigios el TSJA determinó, que de acuerdo con la normativa que rige la materia, los requisitos para autorizar la apertura y funcionamiento de un centro; así como para justificar la denegación de un concierto educativo son objetivos, por lo que no cabe una discrecional actuación por parte de la DGA.
- XII. Indicó que, en materia de conciertos educativos, al margen de la interpretación que haga de la normativa la Administración, no puede ser de aplicación el principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada, ya que en nuestro país conviven dentro del marco escolar, tanto los centros públicos como los centros privados concertados para garantizar el derecho a la educación.

- XIII. Así mismo, señaló que, en relación con la concesión de estos conciertos, los criterios que han de regir dicha actuación son también de carácter objetivo. Como forma de proteger la libertad de enseñanza de juicios subjetivos de la Administración es necesario que en caso de denegar o no renovar un concierto educativo, la decisión se fundamente en una serie de razones técnicas que acrediten la no concurrencia de estos criterios, exigiéndose una justificada motivación.
- XIV. La evidente falta de motivación de las órdenes declaradas nulas por el TSJA evidencia una arbitraria actuación de la DGA, que desde mi punto de vista solo puede explicarse como una muestra de hostilidad hacia la enseñanza concertada, y en el caso de los Colegios Sansueña y Montearagón, hacia la educación diferenciada.
- XV. La educación concertada, pese a tratarse de la garantía de un derecho fundamental y estar objetivamente reglamentada, se ve continuamente sujeta a diferentes vaivenes políticos que hacen peligrar el derecho a la educación. Pese al trasfondo de las polémicas que surgen entorno a este asunto, debido a su importancia entiendo que es importante despolitizarlo, primando en el debate el respeto a la libertad de las familias en el ámbito educativo, en base al derecho fundamental que les ampara.

V. FUENTES

1. Legislación internacional

- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
- Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1952)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

2. Legislación nacional

- Constitución Española (1978)
- Estatuto de Autonomía de Aragón (1982)
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
- Ley Orgánica 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

3. Jurisprudencia

- STC 5/1981, de 13 de febrero de 1981
- STC 77/1985, de 27 de junio de 1985
- STS 5861/2008, de 6 de noviembre de 2008
- STS 69/2010, de 18 de enero de 2010
- STS 1180/2016, de 25 de mayo de 2016
- STSJA 168/2019, de 2 de abril de 2019
- STSJA 145/2017, de 22 de febrero de 2017
- STSJA 374/2017, de 22 de febrero de 2017
- STSJA 698/2019, de 27 de mayo de 2019
- Auto del TSJA de 3 de septiembre de 2015
- Auto del TSJA de 9 de septiembre de 2015

4. Otras fuentes

- Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos
- Orden de 3 de marzo de 2014, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se resuelven los expedientes de acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2014/2015
- Orden de 30 de diciembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento para el acceso, modificación de conciertos educativos para el curso académico 2015/2016

- Orden de 1 de junio de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se resuelven los expedientes de acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2015/2016, en lo concerniente a los centros “Colegios Montearagón y Sansueña”
- Orden de 12 de junio de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se resuelven los expedientes de acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2015/2016, en lo concerniente al centro “Colegio Internacional Ánfora”
- Orden de 31 de agosto de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que suspende la ejecución de la Orden de 12 de junio de 2015 que resolvía el expediente de acceso y modificación de los conciertos educativos para el curso 2015-2016 en lo concerniente al Colegio Internacional Ánfora
- Resolución de 24 de febrero de 2015, del Director General de Ordenación Académica del Gobierno de Aragón, por la que se autoriza la construcción del Colegio Internacional Ánfora
- Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico de Centros y Registro del Gobierno de Aragón, por la que se hace pública la parte dispositiva de la Resolución de 20 de agosto de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se deniega la autorización de apertura y funcionamiento del centro docente privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, “Internacional Ánfora” de Cuarte de Huerva
- Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, por la que se modifica el concierto educativo del centro "Internacional Ánfora", de Cuarte de Huerva